

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. José Dolores Cuevas, contra el C. Tesorero de los fondos municipales de esta Capital, que le cobra ejecutivamente una multa que le impusieron los ciudadanos que sin carácter legal, fungen como Ayuntamiento de esa Ciudad, por no querer asistir á sus sesiones.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Aunque el Tesorero de los fondos municipales de esta Ciudad, niega el cobro ejecutivo que hace al C. José D. Cuevas, de la suma de diez pesos que motiva el presente juicio de amparo, los oficios originales que el quejoso exhibió últimamente, y obran acumulados á estos autos de órden verbal de V. prueban de la manera mas auténtica y plena, que en efecto existe ese hecho reclamado, y que el funcionario que lo ejecuta ha tenido tan firme resolución de hacerse pago de dicha suma, que si cada una de las tres personas á quienes ha expedido órden de entredicho contra el actor, hubiese de cumplimentarla en su totalidad, resultaría que este tendría que sufrir los perjuicios de un triple pago que haria ascender los dos pesos primitivos de multa á treinta y dos pesos diez y ocho tres cuartos centavos.

Pero poco importaria semejante gravámen, si el quejoso fuese legítimo munícipe del Ayuntamiento de esta Capital, porque su resistencia injustificada á desempeñar las funciones anexas á semejante cargo aconseja á que está obligado todo ciudadano, puede muy bien autorizar la imposición de esa pena pecuniaria para castigar dicha falta y procurar á la vez por este medio, que cumpla con sus deberes; pero cuando el supuesto consejal alega en el ocurso de amparo, que no ha sido elegido por el pueblo, como lo previene el artículo 75 de la Constitución

de este Estado y como se practica en todo gobierno republicano, porque los Cuerpos municipales son el principio y la base fundamental de la República y la democracia, y cuando ante tal terminante alegación el Tesorero contra quien se intenta este juicio ha guardado el mas profundo silencio, por que seguramente le ha sido imposible negar que el actor, lo mismo que la mayoría que figura en el que se llama Cuerpo municipal de esta Ciudad, no tienen otro título que el nombramiento del Ejecutivo del Estado, cuya autoridad, para que no sea desconocida por ilegítima, ha sido preciso afianzarla con el célebre decreto de 7 de Junio último, entonces, la exigencia de que el C. José D. Cuevas preste ese servicio en virtud de dicho nombramiento, sin remuneración de alguna clase, y la multa impuesta por su falta de voluntad á prestarlo, causan una flagrante violación del Código fundamental de la República, en sus artículos 5 y 16.

Con apoyo pues de ellos, y del 1º fracción 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, el fiscal pide a V. sentencia definitivamente este juicio, declarando que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José D. Cuevas, contra los actos del C. Tesorero de los fondos de este municipio, que le retiene diez pesos para hacer efectivo el pago de dos pesos de multa impuesta por el Ayuntamiento indebidamente.

Mérida, 2 de Setiembre de 1874.—  
P. Híjuelos.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Setiembre 3 de 1874.— Visto este juicio de amparo promovido por el C. José Dolores Cuevas, contra el C. Tesorero de los fondos municipales de esta Capital, que le cobra ejecutivamente una multa que le impusieron los ciudadanos que sin carácter legal, fungen como Ayuntamiento de esta Ciudad, por no querer asis-

tir á sus sesiones, con cuya multa alega, que violan en su persona las garantías de los artículos 5, 16 y 27 constitucionales. Visto el auto en que se negó la suspensión del acto reclamado; el informe de dicho Tesorero sobre lo principal; el pedimento fiscal; la citación para sentencia con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: que no se ha negado la demanda del quejoso, la cual expresa haber sido nombrado vocal del Ayuntamiento de Mérida, por el Sr. Lic. D. Miguel Castellanos Sanchez, fungiendo como Gobernador del Estado.

Considerando: que dicho nombramiento es opuesto al artículo 75 de la Constitución política local, en atención á que por el tenor literal de este artículo, los Ayuntamientos deben ser de elección popular directa.

Considerando: que no derivando su nombramiento de elección popular la mayor parte de los que componen el Cuerpo municipal, del cual manifiesta el quejoso no querer formar parte, claro es, que no es un Ayuntamiento constitucional, por lo que no ha podido imponerle la multa de que se queja, sin violar en su persona la garantía del artículo 16 de la Constitución federal por falta de legitimidad, y por consiguiente, de competencia constitucional.

Considerando: que por la misma falta de legitimidad en el Cuerpo municipal y de elección en el quejoso, no podían obligarlo á concurrir á las sesiones municipales, sin violar en su persona el artículo 59 constitucional, así como no podía el Tesorero municipal hacer efectiva la multa sin faltar al artículo 27 de la Constitución general.

Considerando: que aunque dicho Tesorero alega en su informe, haber quedado sin efecto la multa impuesta á Cuevas por no tener modo de cubrirla, aquello es falso, segun se comprueba por los tres oficios exhibidos por el actor, en que el referido Tesorero dicta órdenes de entredicho de cantidades pertenecientes á aquél.

Por estos fundamentos, y de conformidad

con el parecer fiscal, fundado en los mencionados artículos y el 101 de la Constitución, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. José Dolores Cuevas, contra los actos del Tesorero municipal, que le cobra ejecutivamente una multa impuesta por el Ayuntamiento, que carece de legitimidad y competencia constitucional.

Segundo: Ságuese testimonio de este fallo para publicar, y elévense originales los autos á la Suprema Corte de Justicia en revisión, arreglado á los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de amparo de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber.—*L. Manzanilla*.—Ante mí.—*José Anacleto Castillo*.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 23 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. José Dolores Cuevas, ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, contra el C. Tesorero de los fondos municipales de la Capital del Estado, que por el cobro de una multa impuesta á dicho ciudadano por los miembros del Ayuntamiento de Mérida, por no querer asistir á las sesiones de este Cuerpo, con lo cual, en concepto del solicitante, se violan las garantías individuales consignadas en los artículos 5, 16 y 27 de la Constitución. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del C. Juez de Distrito y considerando: que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, y que el solicitante, usando de este derecho, ha podido á su arbitrio dejar de asistir á las sesiones de la Corporación municipal sin incurrir en pena alguna legal; que en consecuencia, carece de facultades el C. Tesorero del municipio

para hacer al solicitante el cobro de la multa mencionada.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito, que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Juan Acibar y Arturo Ferrer, contra providencias del Gefe político del Canton de Córdoba, que les obliga á llevar una cadena al pie, para cumplir una pena de trabajos forzados de policía que les impuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los sentenciados á trabajos de policía por el H. Tribunal de Justicia del Estado, patrocinados por el C. Lic. Rafael Herrera, solicitan am-

paro de la Justicia federal contra providencias del C. Gefe político de Córdoba, que los obliga á cumplir sus condenas, aumentándoles la pena infamante de llevar una cadena y grillete al pie, cuya pena es, no solo contraria al art. 22 de la Constitución federal, sino tambien á la ilustración del siglo en que vivimos; y habiéndose pedido el informe correspondiente, ha sido emitido, manifestando la autoridad política, que es cierto el hecho que motiva la queja y que su procedimiento está apoyado en las leyes vigentes en el Estado, y entre ellas el art. 101 del Código penal, que dice: "que los condenados á sufrir la pena de trabajos de policía, tendrán un grillete al pie con su cadena, pudiendo estar unido con ella á otro reo, siempre que lo exija la seguridad de ellos y sea compatible con los trabajos á que se los destine," agregando dicha autoridad, que por lo que expone se verá que no se han separado del cumplimiento de sus deberes.

El suscrito promotor al evacuar su traslado, tiene el sentimiento de no convenir en el modo de pensar del C. Gefe político de Córdoba, pues en virtud de lo prevenido en los arts. 1º y 126 de la Constitución federal, está obligado á observar su art. 22, que prohíbe para siempre las penas infamantes, con preferencia al 101 del Código penal del Estado, por estar ambas disposiciones en abierta oposición; y por consiguiente, no es exacto que hubiese cumplido con su deber en este caso.

En consecuencia, y como efectivamente el acto que se reclama viola la garantía que á los quejosos otorga el citado art. 22, de que no se les deberá imponer ninguna pena infamante, como lo es sin duda alguna la de sufrir el grillete y cadena, con vista de lo prevenido en los arts. 101 y 102 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pido á V. se sirva ampararlos y protegerlos contra la indicada pena.

H. Veracruz, 31 de Marzo de 1874.—*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*